ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Correspondencia.
- 4.- Dictamen, que presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora.
- 5.- Dictamen, que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Punto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019; para los efectos del artículo 135 de la Constitución Federal.
- 6.- Propuesta de la Mesa Directiva para sesionar un día distinto a los previstos en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
- 7.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022.**

21 de octubre de 2022. Folio 2235.

Escrito del Secretario del Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo, la relación de los acuerdos enviados a dicho ayuntamiento, para su seguimiento y aprobación, se anexa las evidencias documentadas en donde se detalla los acuerdos a los cuales se les dio respuesta. **RECIBO Y SE ACUMULA A LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.**

24 de octubre de 2022. Folio 2238.

Escrito de la Presidenta Municipal de Guaymas, Sonora, con el que da respuesta al oficio número 296-II/22, en relación al exhorto emitido por este Poder Legislativo, para que en ejercicio de sus atribuciones, incluyan en sus proyectos de gastos e inversión en obras, para que formen parte del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora y, del Presupuesto Municipal, respectivamente, para el ejercicio fiscal 2023, los recursos necesarios para destinarlos a la rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los municipios de Empalme y Guaymas. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO NÚMERO 139, APROBADO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2022, POR ESTE PODER LEGISLATIVO.**

24 de octubre de 2022. Folio 2239.

Escrito de la Presidenta Municipal de Guaymas, Sonora, con el que da respuesta al oficio número 51-II/22, en relación al exhorto emitido por este Poder Legislativo, para que designen una persona encargada de la implementación de la Agenda 2030 en su municipio, que a su vez fungirá como enlace de su Ayuntamiento con la Comisión especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en el Congreso del Estado de Sonora, con la finalidad de que en conjunto logremos erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO NÚMERO 126, APROBADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, POR ESTE PODER LEGISLATIVO.

24 de octubre de 2022. Folio 2241.

Escrito del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, con el cual da respuesta al oficio número CES-PRES-24/2022, mediante el cual este Poder Legislativo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diferentes disposiciones del Código de Familia del Estado de Sonora, con el objeto de armonizar la protección de los derechos y garantías de las y los cónyuges en materia de demandas de divorcio en el Estado de Sonora, con la finalidad de que se analice y elabore el correspondiente dictamen de impacto presupuestario. **RECIBO Y SE ACUMULA AL FOLIO 1978, TURNADO A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.**

24 de octubre de 2022. Folio 2242.

Escrito del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, con el cual da respuesta al oficio número CES-PRES-DKB-032/2022, mediante el cual este Poder Legislativo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora, con la finalidad de que se analice y elabore el correspondiente dictamen de impacto presupuestario. **RECIBO Y SE ACUMULA AL FOLIO 2125, TURNADO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.**

25 de octubre de 2022. Folio 2243.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, con el que remiten Acuerdo número 2, del Acta de Ayuntamiento número 27, mediante el cual resuelven exhortar a este Congreso del Estado, para solicitar la creación de un nuevo relleno sanitario para salvaguardar la vida y la salud de todos los ciudadanos y visitantes, así como la protección al medio ambiente. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE HACIENDA.**

**COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES DE LA SOCIEDAD**

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES:
MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES
PROSPERO VALENZUELA MUÑER
MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA
BEATRIZ COTA PONCE
ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER
PALOMA MARÍA TERAN VILLALOBOS
KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX

HONORABLE ASAMBLEA:

A quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad de esta Sexagésima Tercera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen, por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito presentado por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual contiene **INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 91 BIS A LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

La iniciativa de mérito fue presentada el día 26 de octubre de 2021, misma que se funda en los siguientes argumentos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4to, protege el derecho que tienen las personas con discapacidad a un trato digno, equitativo, a mecanismos de acceso a la justicia y servicios públicos certeros y a una inclusión debida, conforme a la vida que se tiene en sociedad.

Para que vivamos en un estado incluyente, en el que todas las personas cuenten con accesibilidad universal sin barreras, acceder a los mismos servicios públicos y privados sin distinción y tener las mismas posibilidades de éxito en cualquier trámite o servicio ya sea público o privado se requiere seriamente inclusión e igualdad total. Si el caso fuera contrario, hablamos de una discriminación absoluta, ya que no todas las personas tienen a su alcance las capacidades físicas de otras.

Desde el año 2014 se decretó en México el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja, y el 12 de Julio de 2018 se reformó el artículo 4 de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad para incluir la acondroplasia o talla baja como discapacidad y dejar claro que las personas de talla baja deben gozar plenamente y sin discriminación de todos los derechos.¹

En Sonora, el 16 de Julio del 2015, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa con proyecto de Ley que declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Estatal de las personas con talla baja”. Con el afán de reflexionar y promover los derechos que poseen estas personas y dar un día para sensibilizar a todos los sectores de la sociedad acerca de la problemática situación que enfrentan día con día las personas con talla baja cuando no existen las condiciones idóneas para su desempeño.

En México viven 11 mil personas de talla baja, por lo que es necesario visibilizarlas a partir de la elaboración de un registro oficial tanto a nivel federal como local y a partir de ello, impulsar el marco legislativo y de políticas públicas para garantizar sus

¹ Página de Consulta: www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/pronunciamiento-25-de-octubre-dia-mundial-de-las-personas-de-talla-baja-y-dia-nacional-de-personas-de-talla-baja, Fecha de Consulta: 07 de Octubre de 2021.

derechos humanos. A la fecha, este grupo de población no está considerado en el Censo de Población que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).²

La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017) expone que, según la percepción de las personas encuestadas, el grupo poblacional de estatura baja es uno de los 11 más discriminados en la Ciudad de México. De igual forma, 35.5% de las personas residentes en la Ciudad de México observa mucha discriminación contra este grupo.

“Ante ello, la CNDH señala que es indispensable identificar las necesidades de manera puntualizada respecto de la población que tiene esa condición, rangos de edad, barreras a las que se enfrentan, oportunidades laborales, educativas y sanitarias a las que tienen acceso, con la finalidad de contar con estadísticas, sensibilizar y construir una sociedad preparada para la correcta inclusión de todas las personas.”³

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un criterio jurisprudencial cercano a la fecha actual, nos recuerda la importancia del artículo primero de la Constitución General y de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma. También, hace énfasis a fin de concretizar lo ofrecido por el numeral antes mencionado, la obligación de ver a la discapacidad como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno y que las personas con discapacidad logren su máxima independencia.

Para mayor ilustración, comparto el criterio antes señalado:

Registro digital: 2022368

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

² Página de Consulta: <https://cdhcm.org.mx/2017/10/necesario-erradicar-la-discriminacion-que-sufren-personas-de-talla-baja/> , Fecha de Consulta: 07 de Octubre de 2021.

³ Comunicado de Prensa CNDH. Página de Consulta: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Comunicados/2018/Com_2018_328.pdf , Fecha de Consulta: 07 de Octubre de 2021

Materia(s): Constitucional

Tesis: I.9o.P.1 CS (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 2080

Tipo: Aislada

MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN SU ADOPCIÓN NORMATIVA.

El artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución General de la República precisa que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Ahora, con motivo de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, así como de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, se incorporó al orden jurídico nacional el modelo social de discapacidad. Por su parte, el Informe Mundial sobre la Discapacidad, emitido por la Organización Mundial de la Salud, permite concretizar el derecho humano a la salud contenido en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Ley Fundamental, al conceptualizar el término "discapacidad" como "todas las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores contextuales de esa persona (factores ambientales y personales)". Al respecto, en el ámbito regional de los derechos humanos, en los Casos Furlán y Familiares Vs. Argentina y Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que "la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, al grado que –para dismantelar las limitaciones que impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad–, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras". Ante todo el marco normativo anterior, se concluye que el modelo social de discapacidad aborda dicha condición con base en dos premisas: i) la discapacidad es el resultado de la interacción entre factores del individuo y su entorno; y, ii) las personas con discapacidad se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se agrava por el fenómeno de discriminación que se erige en su contra. Por ello, en virtud de que las circunstancias contextuales tienden a ser igual o mayormente determinantes que las condiciones médicas en la generación de las barreras que las personas con discapacidad enfrentan, surge la obligación a cargo del Estado Mexicano en el establecimiento de un modelo social de discapacidad, a partir del cual, dicha situación de vulnerabilidad no sea únicamente entendida en términos médicos, es decir, como alteraciones al estado de salud de las personas. Asimismo, el entendimiento integral de la condición de discapacidad reconozca los factores contextuales –tanto a nivel social como personal–, los cuales resultan igual o mayormente determinantes que el aspecto clínico. Así, a efecto de concretizar el mandato contenido en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, que caracteriza al constitucionalismo contemporáneo, todas las autoridades, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de caracterizar la discapacidad como

resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno. De ese modo, por medio de prácticas de inclusión social y medidas de diferenciación positiva ejercidas, en especial por los operadores jurídicos –juzgadores–, será factible remover las barreras clínicas y sociales susceptibles de incidir en el derecho humano a la salud de las personas, así como adoptar medidas efectivas y pertinentes de habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad puedan lograr su máxima independencia.

En consonancia con lo agregado anteriormente, lo que busca este criterio jurisprudencial, es que, atendiendo lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el control de convencionalidad, si atacamos lo que establecen los tratados internacionales, se hace necesario adaptar las condiciones en las que vivimos a las necesidades de las personas con discapacidad. Lo anterior, con el fin de que estos logren su máxima independencia y autonomía.

Lo previsto en el criterio jurisdiccional, solo es una solución más a un problema lleno de burocracia y desatención a la población con alguna discapacidad.

Una necesidad elemental para cualquier oficina pública en nuestro Estado debería ser el escalón universal, que no solamente hace cumplir lo previsto en esta tesis antes marcada, sino incluye a muchos segmentos dentro de las personas con discapacidad y hace que su necesidad desaparezca al ofrecer el escalón universal fijo en dependencias públicas de todos los niveles de gobierno. Es importante agregar, que este primer paso incluye a las oficinas públicas, pero es recomendable que los espacios privados también cuenten con un escalón universal.

Si no existe un ejercicio autocrítico de que es lo que necesitan para que no sufran discriminación. Muchas veces, en sentido de omisión, las dependencias públicas no cumplen su trabajo de establecer un trato digno e igual, debido a las ausencias de trato que se presenta a las personas con discapacidad.

En el caso en concreto de las personas de talla baja, se reconoce al escalón universal como un instrumento primordial para que no se les discrimine y en efecto, se les pueda dar un trato digno y con inclusión total.

Es importante hacer hincapié en que las personas de talla baja, y en general todas las que tengan algún tipo de discapacidad, necesitan ajustes de accesibilidad a su entorno directo por el que se movilizan.

La herramienta con la que se pretende adicionar a una ley de orden estatal como solución a muchos problemas de inclusión en nuestra entidad es la del escalón fijo universal en todas las oficinas públicas de todos los niveles de gobierno. Si bien, como se mencionó previamente, lo ideal sería que en todos los lugares públicos y privados, es un primer gran paso para concientizar a todos los servidores públicos que debemos hacer equilibrios en los tratos hacia las personas y que todos, absolutamente todos, somos iguales sin importar nuestra condición.

En el caso de las personas de talla baja, se hace necesario que exista el escalón universal que en primera instancia sirva para facilitar el acceso de las personas a los servicios públicos que se ofrezcan en cualquier instancia pública.

En Sonora, las oficinas ocupadas por funcionarios públicos dirigidas a la atención de la población no cuentan con las instalaciones idóneas para atender a una persona con discapacidad y mucho menos, a una persona de talla baja.

Es clave entender la importancia de los pequeños detalles, más cuando se trata de inclusión. Los pequeños detalles transforman la circunstancia y en este caso, cuando una persona de talla baja o con alguna discapacidad, asista a una oficina pública de cualquier nivel de gobierno, es imperativo que esta cuente con los elementos necesarios para el acceso justo, equitativo y sobre todo cómodo al servicio por parte del ciudadano que requiera un escalón universal.

En ese sentido, se considera necesario realizar una adición a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de Discapacidad del Estado de Sonora.

Esto permitirá obligar a todos los entes públicos que integren en su infraestructura lo idóneo para que las personas con alguna discapacidad y específicamente, las personas de talla baja, puedan tener el mismo acceso y derecho universal que tienen todos los sonorenses para utilizar un servicio o transporte público, abonando a su autonomía, desarrollo integral e independencia.

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de las diputadas y diputados del Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de las y los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Carta Magna, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

En el mismo precepto constitucional, se enuncia que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas. De igual forma todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De igual forma, el primer precepto de nuestra Constitución, marca que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este orden de ideas, el mandato constitucional deja claro que todas las personas gozar plenamente de los derechos humanos, que estos se encuentran correlacionados unos con otros y en todo momento deben ser progresivo para el desarrollo

humano, la discapacidad no debe ser una limitante para acceder a las prerrogativas humanas, todo lo contrario, y así mismo con la interpretación del la constitución y de los tratados a los que el estado mexicano se encuentra suscrito, debe atenderse el principio pro persona.

En congruencia, en un autentico control de convencionalidad, el Estado debe atender lo establecido en la Declaración de los Derechos Humanos, emitida por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Asimismo, el Organismo Mundial de las Naciones Unidas, ha generado instrumentos jurídicos que fortalezcan el marco de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el 13 de diciembre de 2006, fue aprobado por la Asamblea General de este organismo, La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, este tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente y, además, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en el instrumento internacional.

En este sentido, el artículo 2º de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, establece las siguientes definiciones:

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

En relación, al propósito y a las definiciones que encierra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, de acuerdo al artículo 4º de la misma, los Estados partes tienen las siguientes obligaciones:

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;

Ahora bien, del instrumento internacional, reproducido con anterioridad, cabe destacar lo establecido en el artículo 20° referente a la movilidad personal, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, en este precepto cabe destacar las guías o surcos lineales para personas con discapacidad visual.

En este orde de ideas, la iniciativa materia del presente dictamen, entrega herramientas para propiciar el goce y ejercicio de los derechos huamos de las personas con discapacidad, generando condiciones de igualdad, movilidad, y una adecuada inclusión.

QUINTA. - Las personas con discapacidad, en el caso específico, personas de talla baja y con discapacidad visual, en el día a día, se enfrentan a las barreras que les imponen el entorno social, lo cual les impide una inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

En este sentido, la iniciativa de mérito, propone que la infraestructura de las oficinas de la Administración Pública del Gobierno del Estado, centros educativos, unidades de transporte público, áreas culturales o recreativas y todas las áreas en donde se presten servicios públicos, deberán contar con escalones universales fijos y/o móviles para las personas de talla baja, así como guías o surcos lineales para personas con discapacidad visual.

De lo anterior, cabe destacar que, de acuerdo al protocolo facultativo, se estaría cumpliendo con la obligación general de contar con una estrategia que promueva

los derechos humanos de las personas con discapacidad, con la implementación del escalón universal para personas de talla baja, se materializan los ajustes razonables que define el protocolo, negarnos a este tipo de adecuaciones, vulneraría el principio de no discriminación.

Igualmente, estas acciones, actualizan la adopción de medidas legislativas a favor de las personas con discapacidad, garantizando la inclusión y accesibilidad de las personas con talla baja en los lugares que se ofrecen servicios públicos.

En definitiva, las personas con discapacidad no buscan ser tratados de una manera distinta y/o especial, y en este sentido, debemos propiciar acciones legislativas, que encierren acciones afirmativas para propiciar un trato igualitario, que hagan sentir a las personas con discapacidad incluida y en pleno goce de sus derechos humanos, dignificando su día a día.

En resumen, esta comisión de análisis legislativo, considera que la presente iniciativa debe ser aprobada, toda vez que impacta de manera positiva, en la promoción y fortalecimiento del desarrollo personal de las personas con discapacidad visual y las personas de talla baja.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 79, fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sonora, mediante oficio número 711-II/21, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo tuvo a bien solicitar al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la remisión a esta Soberanía, del dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión.

Al efecto, mediante oficio número SE-05.06-3055/2022, de fecha 26 de octubre de 2022, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, señala lo siguiente:

“Respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 91 BIS A LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA, presentada por los DIPUTADOS CC. ELIA SAHARA SALLARD HERNÁNDEZ, KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX, NATALIA RIVERA GRIJALVA Y ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, integrantes del Partido Revolucionario Institucional e identificada con el número de folio 0235, se observa que tiene por objeto, en esencia, obligar a todos los entes públicos que integren en su infraestructura lo idóneo para que las personas con alguna discapacidad y específicamente, las personas de talla baja, puedan tener el mismo acceso y derecho universal que tienen todos los Sonorenses para utilizar un servicio o transporte público, abonando a su autonomía, desarrollo integral e independencia, con el fin de establecer los siguientes puntos:

OBJETO DE LA INICIATIVA

Se adiciona el artículo 91 Bis para establecer la obligatoriedad a todas las oficinas de la Administración Pública del Gobierno del Estado, incluyendo centros educativos, unidades de transporte público, áreas culturales o recreativas y en general toda oficina donde se presten servicios públicos, a contar con escalones universales fijos y/o móviles para las personas de talla baja, así como guías o surcos lineales para personas con discapacidad visual.

Bajo ese razonamiento, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora por conducto de la Subsecretaría de Egresos, en plena observancia a las disposiciones aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, emite Opinión de Estimación de Impacto Presupuestario, en los siguientes términos:

OPINIÓN DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO

*Al respecto, después del análisis realizado a la presente Iniciativa y considerando que se busca obligar a todos los entes públicos que integren en su infraestructura lo idóneo para que las personas con alguna discapacidad y específicamente, las personas de talla baja, puedan tener el mismo acceso y derecho universal que tienen todos los Sonorenses para utilizar un servicio o transporte público, mediante la implementación de escalones universales fijos y/o móviles para las personas de talla baja, así como guías o surcos lineales para personas con discapacidad visual, se estima que la presente Iniciativa significará, en caso de aprobarse, otorgar recursos presupuestarios adicionales a cada uno de los entes públicos obligados para que estén en posibilidades de cumplir tal compromiso; y, al no advertirse o establecerse en Ley la fuente de financiamiento, algún ingreso compensado o que se realizará de manera progresiva a justándose a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria que se determine en cada ejercicio fiscal para efecto de la debida implementación y realización del objeto de la misma, **SE ESTIMA QUE LA PRESENTE INICIATIVA SI REPRESENTA UN IMPACTO PRESUPUESTARIO QUE AFECTA EL BALANCE SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS DEL ESTADO DE SONORA.***

Cabe señalar que de la presente iniciativa NO se advierte la existencia de normas generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria o en el ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

La presente opinión se emite sobre la versión de la iniciativa referida con antelación, por lo que no prejuzga respecto de modificaciones que, en su caso, se realicen a la misma.”

Para atender la opinión de la autoridad hacendaria, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de manera posterior a la reunión de dictaminación de esta iniciativa, estimamos necesario hacer una adecuación al artículo primero transitorio del Decreto, para que entre en vigor hasta el 01 de enero de 2023, permitiendo con ello que se hagan las adecuaciones necesarias en el Presupuesto de Egresos del próximo año, para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo, a partir del ejercicio fiscal de 2023.

En conclusión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 91 BIS A LA LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 91 Bis a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de Discapacidad del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 91 BIS.- La infraestructura de las oficinas de la Administración Pública del Gobierno del Estado, incluyendo centros educativos, unidades de transporte público, áreas culturales o recreativas y en general toda oficina donde se presten servicios públicos, deberán contar con escalones universales fijos y/o móviles para las personas de talla baja, así como guías o surcos lineales para personas con discapacidad visual.

Se entenderá por escalón universal un peldaño que puede ser fijo o movable, con una altura de treinta centímetros y con la capacidad de soportar un peso de hasta ciento cincuenta kilogramos, en caso de ser movable deberá ser ligero y de fácil manejo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2023, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado, deberán de realizar las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Decreto, en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada en vigor del mismo.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2022.**

C.DIP. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES

C.DIP. PROSPERO VALENZUELA MUÑER

C.DIP. MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA

C.DIP. BEATRIZ COTA PONCE

C.DIP. ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER

C.DIP. PALOMA MARÍA TERAN VILLALOBOS

C.DIP. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES.**

DIPUTADOS INTEGRANTES:

JACOBO MENDOZA RUIZ

HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO

ERNESTO DE LUCAS HOPKINS

AZALIA GUEVARA ESPINOZA

SEBASTIÁN ANTONIO ORDUÑO FRAGOZA

FERMÍN TRUJILLO FUENTES

ROSA ELENA TRUJILLO LLANES

HONORABLE ASAMBLEA:

A las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta LXIII Legislatura, por acuerdo de la Presidencia de este Poder Legislativo, nos fue turnada para estudio y dictamen, Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- En lo correspondiente al procedimiento que motiva el análisis de la minuta en estudio, es importante dejar asentado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 135, previene que dicho ordenamiento fundamental es susceptible de ser adicionado o reformado, con la taxativa de que: *“para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de*

la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados”.

SEGUNDA.- A esta Comisión le ha sido turnada para estudio y resolución Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la cual fue remitida el día 24 de octubre de 2022, a este Poder Legislativo local, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En razón de lo anterior, esta Comisión, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, ha decidido emitir el presente dictamen, a efecto de dar cabal cumplimiento al imperativo establecido en el artículo 135 de nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional en el sentido de aprobar o no, la reforma que en la misma se hubiese planteado a este Poder Legislativo, como integrante del Constituyente Permanente Federal.

En tal sentido, a continuación, se plasmarán los motivos por los cuales esta Comisión de Dictamen Legislativo considera procedente la aprobación de la minuta referida con antelación.

TERCERA.- La Minuta en estudio tiene su origen en una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propuso la reforma del primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional, turnada el 02 de septiembre de 2022, a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual aprobó el dictamen respectivo en reunión celebrada el 13 de septiembre de 2022, mismo que se discutió

y aprobó por el Pleno de dicho órgano legislativo federal, al día siguiente, remitiéndose en esa misma fecha a la colegisladora Cámara de Senadores.

CUARTA.- La Cámara de Senadores emitió dictamen respecto de la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados, en sesión plenaria celebrada el 04 de octubre de 2022, el cual se analiza en el dictamen emitido el día 12 del mismo mes y año, respecto de la Minuta que nos ocupa, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la siguiente manera:

“... Estudio de fondo. La Minuta de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales para estudio y dictamen, que reformó la diversa que modificó el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de Guardia Nacional, se puede sintetizar en los términos siguientes:

El 14 de septiembre próximo anterior, la Cámara de Diputados en pleno y por la necesaria mayoría constitucional calificada aprobó el dictamen con proyecto de Decreto de reforma al primer párrafo y adición de un párrafo tercero y uno cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en tres puntos fundamentales:

El primero, fue ampliar el plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participara en tareas de seguridad pública y que esto se hiciera con respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como sujeto a principios diversos.

El segundo, fue institucionalizar un control parlamentario, a través de una Comisión mixta de diputados(as) y senadores(as) que habría analizado la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las labores de seguridad pública.

El tercer punto, consistió en aprobar medidas de transparencia y rendición de cuentas, a través de un informe periódico que rindiera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.

En la minuta que se examina, la Colegisladora mantiene la ampliación del plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participe en tareas de seguridad pública, reubicando la obligación de respeto y de informe sobre dicho respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas y afromexicanos en el propuesto párrafo cuarto del Artículo Quinto Transitorio que se reforma.

Una segunda modificación, que se desglosa en los párrafos segundo y tercero adicionado al Artículo Quinto Transitorio en valoración, implica precisar que la Fuerza Armada debe capacitarse en materia policial civil, en el entendido de que no sustituirá a las autoridades civiles competentes.

Por otra parte, en la minuta que se analiza se obliga al Ejecutivo para que rinda informes semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública.

Se precisa en la minuta la variación del control parlamentario, ahora con base en una comisión bicameral sujeta a los tiempos precisos en que la Fuerza Armada permanente participe en labores de seguridad pública, con la obligación legislativa de aprobar un dictamen en el cual se evalúe la aplicación del Artículo Transitorio Quinto en revisión, con la participación posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir las recomendaciones que correspondan al fin del propio numeral en revisión, y vinculando al Ejecutivo Federal para que dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones hechas.

Asimismo, se propone que la Cámara de Senadores evalúe el informe anual de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, para propender a que sean la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública las que desarrollen las tareas de seguridad finalmente, en términos del artículo 21 de la Constitución Nacional.

Adicionalmente, se impone a los ejecutivos locales que informen a sus congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación integral de la aplicación del artículo transitorio séptimo, con fines de corrección y ejecución.

Finalmente, en los transitorios del proyecto de Decreto, se proponen ajustes con el ánimo de brindar racionalidad pragmática y presupuestal, porque:

- *Se obliga a que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda diagnósticos y avances de los programas orientados al fortalecimiento de los cuerpos de policía locales.*
- *Porque se propone instituir un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.*
- *Porque el fondo que refiere el punto anterior se debe distribuir con base en un criterio per cápita y en base a reconocimiento de desempeño de las entidades locales.*
- *Porque se prevé un fondo local de recursos, en términos similares al anterior, para los municipios.*
- *Porque se sientan bases para garantizar la transparencia y sujeción a los principios correspondientes del artículo 134 de la Constitución de la República, en el ejercicio de los recursos públicos en la materia.*

Y, finalmente, en el propuesto artículo Tercero Transitorio se prevé un régimen judicial, para solventar aquellos juicios en trámite, sobre la base de la aplicación de las normas que los regularon al iniciarse.

Ello, para quedar en los términos de la tabla inserta en el apartado B de Contenido de la minuta, la que se da por reproducida en esta apartado como si se insertara a la letra.

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, observan que el problema objeto materia de análisis puede ser planteado en forma de un dilema resolutivo, esto es, entre insistir en la minuta tal como fue aprobada originalmente en la Cámara de Diputados, recogiendo los tres puntos básicos antes enunciados, o bien, aprobar la minuta con proyecto de Decreto como fue aprobada en la Cámara de Senadores, en la que se acogen esas mismas tres propuestas, pero en la cual se desarrollan, a la vez de manera más amplia y precisa, y se agregan medidas administrativas de seguimiento, evaluación, transparencia y razonabilidad presupuestal.

Una primera reflexión atiende al carácter de las normas objeto de reforma, esto es, a su naturaleza constitucional, que implica un lenguaje más abierto, de principios y que dota al legislador ordinario de márgenes de acción legislativa de desarrollo más amplios.

Desde ese ángulo, la Comisión que dictamina estima que el amplio y profuso texto normativo constitucional que la Colegisladora acogió en la minuta del caso, no tiene un talante de necesidad inexcusable, cuenta habida que varias de las adiciones o modificaciones pudieron encontrar cabida en la legislación secundaria, sin que fuera imprescindible su enunciado en la Ley Fundamental.

No obstante, esta Comisión opina que el principio de pluralidad que implica la deliberación y participación de las senadoras y los senadores en la discusión de la minuta que esta Cámara turnó a la de Senadores, implica de igual forma la facultad de proponer modificaciones y la formación de consensos de mayoría que revelan un carácter democrático en la integración de la reforma constitucional que implica la minuta que se analiza.

Por esa razón, esta Comisión hace suyo dicho principio de pluralidad democrática expresado en el proyecto de Decreto de la minuta en examen, y pondera de forma subrayada la utilidad social de aprobar la minuta con el ánimo de brindar a las Fuerzas Armadas una base constitucional precisa, extendida y legítima para actuar en tareas de seguridad pública, en tanto los cuerpos de la Guardia Nacional y la propia Guardia Nacional en un sentido institucional se consolida, al par de las diversas instituciones de seguridad pública.

Por otra parte, desde un punto de vista de racionalidad normativa constitucional, es posible apreciar en la minuta que se dictamina, rasgos sustantivos favorables.

Si se atiende a una racionalidad sistemática constitucional, es posible observar que la Colegisladora es puntual en vincular las adiciones y reformas tanto a preceptos constitucionales específicos, como incluso a interpretaciones judiciales que determinan el sentido y alcance de las normas constitucionales, así, por ejemplo, en el caso se armoniza el actuar de las Fuerzas Armadas a la Constitución en general y al artículo 21 de la

Constitución, para brindarle un cariz civil, y para determinar los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinariedad y complementariedad, o bien en el caso de observancia debida prescrita al artículo 134 en materia de presupuesto en la materia.

Desde un punto de vista de teleología y pragmática constitucional, es posible observar que la Cámara de Senadores incorpora medidas de transparencia, publicidad, seguimiento, evaluación y corrección, a través de informes, dictámenes, recomendaciones y mecanismos de ajuste frente a potenciales desvíos en la aplicación del Artículo Transitorio en reforma, a partir de la Comisión Bicameral y de las propias Cámaras que han de jugar un papel relevante.

En una arista de racionalidad económica, también la Colegisladora ha sido prodiga al establecer mecanismos de fondeo para fortalecer a las instituciones de seguridad pública local y municipal, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para ejercer de manera adecuada sus funciones y que los postulados constitucionales que traza no sean meros enunciados sin sentido práctico por carecer de presupuesto para realizarlos.

Por otro lado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión que dictamina son contestes en considerar que, la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, son de un carácter residual y temporal, y recogen los propios razonamientos vertidos en la minuta de origen de esta Cámara y la de Senadores, a los cuales se remite de igual forma.”

En suma esta Comisión de Puntos Constitucionales se encuentra acorde con la minuta objeto de revisión.”

QUINTA.- Finalmente, en el dictamen de fecha 12 de octubre de 2022, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifestó acorde con el resolutivo final de la Minuta aprobada por su colegisladora, resolviendo lo siguiente:

“D. Resultado del dictamen

A continuación, se plantea el resultado del dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional.

PRIMERO. - *Han quedado, por esta Comisión de Puntos Constitucionales, considerados, sustentados y analizados sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos,*

argumentos y alcances de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Senadores el 4 de octubre de 2022, turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales,

SEGUNDO. - *Como resultado, se emite dictamen en sentido positivo por esta Comisión de Puntos Constitucionales a la citada minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional.”*

SEXTA.- Para el análisis de la Minuta que es materia del presente dictamen, quienes integramos este Poder Legislativo, en sesión ordinaria de Pleno celebrada el 25 de octubre de 2022, contamos con la exposición del Maestro Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, y la participación del Doctor Alfonso Durazo Montaña, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, a lo cual, se presentaron diversos posicionamientos de los grupos parlamentarios y la representación parlamentaria que integran la LXIII Legislatura.

En esas condiciones, podemos presumir que la Minuta que es materia de este dictamen, ha sido plenamente conocida y analizada por todas y todos los integrantes de esta LXIII Legislatura, por lo que al profundizar en el estudio de los argumentos expuestos con antelación, para esta Comisión Dictaminadora, resulta positivo aprobar la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

En razón de todo lo antes expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora sometemos a consideración del Pleno el siguiente punto de:

ACUERDO:

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que en su parte conducente es como sigue:

**“MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO**

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019.

Artículo Único.- Se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. a Cuarto. ...

Quinto. Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser:

I. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil;

II. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma;

III. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución.

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo.

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

Sexto. y Séptimo. ...

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio.

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobrepasar por cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación.”

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"**

Hermosillo, Sonora, a 27 de octubre de 2022.

C. DIP. JACOBO MENDOZA RUIZ

C. DIP. HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO

C. DIP. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS

C. DIP. AZALIA GUEVARA ESPINOZA

C. DIP. SEBASTIÁN ANTONIO ORDUÑO FRAGOZA

C. DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES

C. DIP. ROSA ELENA TRUJILLO LLANES

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.